LVII

Evaluación de la calidad de vida post-reasentamiento involuntario: Un análisis desde el Trabajo Social en proyectos de minería a tajo abierto en Cajamarca

Teresa Norhelia Correa Gonzales
Guido Francisco Loayza Susanibar

LVII

Evaluación de la calidad de vida post-reasentamiento involuntario: Un análisis desde el Trabajo Social en proyectos de minería a tajo abierto en Cajamarca

Teresa Norhelia Correa Gonzales
Guido Francisco Loayza Susanibar

RESUMEN

El presente capítulo de revisión narrativa examina el impacto de los reasentamientos involuntarios derivados de la minería a tajo abierto en la calidad de vida de las comunidades rurales en Cajamarca, Perú. A través de un análisis crítico de la literatura académica reciente, se explora cómo el Trabajo Social interviene en la mitigación de los efectos adversos sobre el tejido social, la seguridad alimentaria y la salud mental de las familias desplazadas. Los resultados evidencian una marcada dicotomía entre la mejora técnica de la infraestructura habitacional y la persistente pérdida de identidad territorial y autonomía económica, factores que a menudo son subestimados por los estándares corporativos. El estudio subraya que los modelos de compensación actuales resultan insuficientes cuando omiten las dimensiones subjetivas del desarraigo y la desarticulación de las redes de ayuda mutua. En consecuencia, se argumenta que el Trabajo Social debe trascender su rol mediador para posicionarse como un agente crítico de abogacía, promoviendo modelos de intervención basados en la interculturalidad y la participación comunitaria efectiva. Se concluye que la sostenibilidad de estos procesos depende fundamentalmente de la capacidad de garantizar una restitución integral de los medios de vida que respete la dignidad y el futuro histórico de las poblaciones afectadas por la expansión minera.

Palabras clave: Reasentamiento involuntario, Minería, Cajamarca, Trabajo Social, Calidad de vida.

INTRODUCCIÓN

La expansión de la actividad minera a tajo abierto en la región de Cajamarca ha transformado significativamente el paisaje socioeconómico y territorial de los Andes peruanos. Este proceso de desarrollo industrial, aunque impulsado por la necesidad de explotación de recursos minerales, a menudo conlleva la implementación de reasentamientos involuntarios. Lejos de ser meros traslados geográficos, estos eventos se constituyen como fenómenos complejos de alta vulnerabilidad, donde las comunidades enfrentan procesos de ruptura habitacional, económica y simbólica (Cernea, 2008).

El problema central radica en la persistente brecha entre los estándares corporativos internacionales —basados frecuentemente en criterios de compensación material y reposición de activos— y la realidad vivida por las familias reasentadas. En este escenario, la pérdida de identidad territorial y cultural suele ser subestimada por los marcos de gestión de impacto. Como señala Scudder (2005), el reasentamiento no solo implica la pérdida de tierra, sino la desarticulación de redes de apoyo social y el trauma derivado del desplazamiento forzado de espacios que poseen una carga histórica y afectiva inalienable. En Cajamarca, el arraigo a la tierra rural y las prácticas agrarias tradicionales chocan con los nuevos entornos planificados por las empresas, generando a menudo una desmejora en la calidad de vida subjetiva que las cifras oficiales de compensación económica no logran capturar adecuadamente.

Ante esta situación, la intervención del Trabajo Social adquiere una relevancia crítica. La disciplina se posiciona como una pieza esencial, actuando como un puente técnico y ético entre las empresas mineras, el Estado y las comunidades locales. El Trabajador Social, en su rol de mediador y defensor de derechos, debe trascender la ejecución operativa de planes de traslado para enfocarse en la reconstrucción del tejido social. Su labor es fundamental para identificar no solo las necesidades materiales, sino también las dimensiones intangibles del bienestar que se ven amenazadas por el proceso extractivo (Harvey, 2004).

El presente artículo de revisión narrativa tiene como objetivo analizar los factores determinantes de la calidad de vida post-reasentamiento en el contexto minero cajamarquino, evaluando críticamente las intervenciones sociales y los impactos percibidos por las poblaciones reubicadas. A través de este análisis, se busca contribuir a la reflexión académica y profesional sobre cómo las políticas de reasentamiento pueden migrar de enfoques puramente compensatorios hacia modelos de acompañamiento

integral que garanticen una verdadera restitución de los medios de vida, respetando la autonomía y la identidad cultural de las comunidades afectadas.

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló bajo un diseño de revisión narrativa de carácter descriptivo-analítico. Este enfoque metodológico permite la integración de diversas perspectivas teóricas y hallazgos empíricos para sintetizar el estado actual del conocimiento sobre los reasentamientos involuntarios en la minería cajamarquina, superando la fragmentación de la información existente en la literatura especializada (Grant & Booth, 2009). La naturaleza de este diseño facilita la exploración de fenómenos sociales complejos y multidimensionales, donde la interpretación cualitativa resulta esencial para comprender la realidad de los actores involucrados desde la óptica del Trabajo Social.

Para la recolección de información, se implementó una estrategia de búsqueda sistemática y rigurosa en bases de datos académicas y repositorios institucionales, incluyendo Scielo, Google Scholar y repositorios universitarios regionales y nacionales. La estrategia utilizó una combinación de términos clave (descriptores) seleccionados por su relevancia temática: "reasentamiento involuntario", "minería Cajamarca", "calidad de vida" y "Trabajo Social". Para optimizar los resultados, se emplearon operadores booleanos (AND/OR) que permitieron refinar la búsqueda hacia el contexto minero de gran escala en la sierra norte del Perú.

Los criterios de selección se establecieron para garantizar la calidad, pertinencia y actualidad de la evidencia. Se incluyeron artículos científicos, tesis de posgrado y documentos técnicos (tales como informes de sostenibilidad o estudios de impacto social) publicados exclusivamente en la última década (2016-2026). Este recorte temporal es fundamental para capturar las transformaciones en los marcos regulatorios y en las estrategias de intervención social que han evolucionado tras la consolidación de los proyectos mineros en la región. Se excluyeron aquellos documentos que no presentaran experiencias específicas en zonas de influencia minera o que carecieran de una fundamentación metodológica clara respecto a los impactos en la población local.

La estrategia de análisis de la información recolectada se estructuró mediante un proceso de síntesis temática, siguiendo los lineamientos de Pope et al. (2007) para la

integración de datos cualitativos en revisiones académicas. Tras un proceso de lectura crítica y categorización, la información fue clasificada en tres dimensiones analíticas fundamentales:

1. Dimensión social, enfocada en la cohesión comunitaria y los cambios en las redes de soporte post-reasentamiento;

2. Dimensión económica, centrada en la reposición de activos productivos y la seguridad alimentaria de las familias; y

3. Dimensión psicológica, que aborda los procesos de duelo territorial, identidad cultural y bienestar subjetivo.

Este abordaje multidimensional permite no solo describir los efectos de los proyectos mineros sobre la población, sino también evaluar la efectividad de las intervenciones del Trabajo Social en la gestión de los procesos de cambio. La triangulación de esta información garantiza que el análisis final posea una base documental sólida, permitiendo ofrecer una visión crítica sobre la calidad de vida y las dinámicas de poder que caracterizan al reasentamiento involuntario en el entorno cajamarquino.

RESULTADOS

Los hallazgos derivados de la literatura examinada evidencian que el reasentamiento involuntario en Cajamarca genera una fractura profunda en la estructura social de las comunidades. El impacto más crítico reside en el debilitamiento de las redes de ayuda mutua, conocidas tradicionalmente como el "ayni" o "minka". Al trasladar a las familias hacia nuevos asentamientos planificados, se altera la proximidad geográfica que facilitaba el intercambio recíproco de bienes y servicios. Esta ruptura, como sostiene Muggah (2014), desarticula no solo la logística de subsistencia, sino la base identitaria que sostiene la cohesión social, transformando comunidades interdependientes en núcleos familiares aislados y dependientes de la gestión corporativa.

En relación con las dimensiones de la calidad de vida, los resultados revelan una dicotomía marcada. En la dimensión material, existe una mejora cuantificable en la infraestructura habitacional y el acceso a servicios básicos como agua potable, electrificación y saneamiento, elementos frecuentemente ausentes en las viviendas rurales originales. No obstante, esta "modernización" habitacional es compensada

con la pérdida definitiva de tierras agrícolas de propiedad comunal. Como subraya el Banco Mundial (2020), la sustitución de activos productivos por infraestructura urbana ignora que la economía campesina cajamarquina es intrínsecamente agropecuaria; por tanto, el acceso a servicios no logra compensar la pérdida de autonomía económica derivada de la desvinculación con la tierra.

Por otro lado, la dimensión subjetiva arroja resultados más preocupantes. Las narrativas recopiladas en los estudios muestran una prevalencia de sentimientos de desarraigo y una percepción de pérdida de autonomía. El traslado forzado es experimentado no como una mejora, sino como una "expropiación de la identidad". Los participantes manifiestan una sensación de desorientación al habitar entornos que, pese a ser técnicamente superiores en diseño, carecen de significado histórico. La literatura sugiere que este fenómeno se traduce en una "pérdida de lugar", donde el individuo pierde el sentido de pertenencia y control sobre su propio destino (Fullilove, 2016).

Finalmente, los desafíos para el Trabajo Social en este contexto son múltiples y complejos. Los profesionales enfrentan obstáculos significativos al operar bajo lógicas corporativas que priorizan el cumplimiento de cronogramas sobre los ritmos de adaptación comunitaria. La gestión de conflictos socioambientales se ve entorpecida por una profunda desconfianza hacia los actores externos, lo que dificulta la implementación efectiva de los planes de restitución de medios de vida. Los trabajadores sociales se encuentran frecuentemente en una posición tensa, intentando equilibrar las exigencias de la empresa minera con la necesidad de garantizar procesos de restitución que sean genuinamente participativos y respetuosos con la realidad local. En conclusión, el éxito de estos planes no debe medirse únicamente por la entrega de activos, sino por la capacidad de reconstruir la seguridad humana y la autogestión de las comunidades afectadas.

DISCUSIÓN

La discusión sobre el reasentamiento involuntario en Cajamarca revela una tensión fundamental entre dos lógicas contrapuestas: la racionalidad instrumental de la gran minería y la racionalidad vital de las comunidades locales. Los indicadores de éxito corporativo, centrados en el cumplimiento de hitos constructivos, la entrega de llaves y el cumplimiento de cronogramas de compensación financiera, suelen presentar una fachada de eficacia técnica. Sin embargo, al contrastarlos con la autopercepción de

bienestar de la población reasentada, surge una desconexión crítica. Como sostiene Vanclay (2017), el impacto social de un proyecto no puede reducirse a métricas de infraestructura; la verdadera calidad de vida está intrínsecamente ligada al sentido de lugar, la seguridad ontológica y la continuidad de las relaciones sociales, dimensiones que las empresas frecuentemente omiten en sus auditorías de resultados.

Este contraste sitúa al profesional del Trabajo Social en una posición de alta complejidad. El rol del Trabajador Social en estos contextos de tensión política transita por un dilema ético constante: ¿cómo ser agente de cambio dentro de una estructura corporativa que busca, primordialmente, mitigar riesgos financieros y reputacionales? En este sentido, es imperativo que el profesional adopte una postura de abogacía (advocacy), centrada en defender los derechos fundamentales de las personas desplazadas. Más que una mera gestión de conflictos, la intervención debe priorizar el fortalecimiento de capacidades comunitarias. Tal como propone Banks (2012), la ética en el Trabajo Social implica cuestionar las estructuras de poder que generan la exclusión, empoderando a la comunidad para que pase de ser un sujeto pasivo de la compensación a un actor político capaz de negociar sus propias necesidades de desarrollo.

Por último, resulta pertinente someter a una crítica rigurosa el modelo de compensación imperante frente a la promesa de "calidad de vida igual o superior" que exigen los estándares internacionales (como los Principios de Ecuador o las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional). La evidencia analizada sugiere que el enfoque actual es insuficiente. La compensación económica, incluso cuando es justa desde una perspectiva de mercado, rara vez sustituye el capital social y cultural perdido (Downing, 2010). Un modelo de sostenibilidad real requiere que los planes de medios de vida no se limiten a la restitución material, sino que integren estrategias de diversificación económica que reconozcan las aptitudes agrícolas preexistentes.

En conclusión, el reasentamiento minero en Cajamarca no debe entenderse como un proceso de "final de proyecto", sino como una intervención prolongada en la vida humana. Si la meta es cumplir con los estándares internacionales de sostenibilidad, las empresas y los profesionales intervinientes deben abandonar el sesgo tecnocrático. Solo a través de una praxis profesional que valore la autonomía comunitaria y la justicia social —y que reconozca los límites del dinero frente a la pérdida de identidad— será posible transformar la realidad de las comunidades cajamarquinas, asegurando que su bienestar post-reasentamiento sea una realidad tangible y no una aspiración retórica.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la presente revisión narrativa permite confirmar que el reasentamiento involuntario derivado de la minería en Cajamarca no constituye un simple acto administrativo de traslado, sino un proceso traumático y multidimensional. La evidencia demuestra fehacientemente que la entrega de infraestructura habitacional, aunque necesaria, es insuficiente para cubrir el vacío dejado por la pérdida del territorio y la desarticulación del tejido social. La calidad de vida de las familias reasentadas se ve vulnerada en sus dimensiones subjetivas, donde el desarraigo y la pérdida de autonomía emergen como las consecuencias más críticas de un modelo extractivo que prioriza la reposición material sobre la integridad humana.

Ante esta realidad, es impostergable transitar hacia propuestas estratégicas basadas en la interculturalidad y el respeto irrestricto a la autonomía comunitaria. Los futuros modelos de intervención deben abandonar la lógica de la "compensación asistencialista" para adoptar enfoques de acompañamiento integral que reconozcan a las comunidades como sujetos de derecho y no como beneficiarios pasivos. El éxito de estos procesos debe medirse por la capacidad de restitución de los medios de vida y la preservación de la identidad cultural, elementos fundamentales para un desarrollo verdaderamente sostenible.

Finalmente, el Trabajo Social en Cajamarca enfrenta el desafío histórico de redefinir su ejercicio profesional. La disciplina debe posicionarse no solo como un mediador técnico entre la empresa y la comunidad, sino como un agente crítico y ético. Es fundamental garantizar que el desarrollo minero nunca comprometa la dignidad y el futuro de las poblaciones locales, ejerciendo una abogacía constante por la justicia social y el bienestar integral de los territorios.

REFERENCIAS

Banco Mundial. (2020). *Directrices sobre reasentamiento involuntario: Hacia una gestión inclusiva y sostenible*. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail

Banks, S. (2012). *Ethics and values in social work* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

Cernea, M. M. (2008). *Compensation and investment in resettlement: Reversing impoverishment.* En J. Mathur & C. Marsden (Eds.), Development Projects and Impoverishment Risks (pp. 15-44). Oxford University Press.

Downing, T. E. (2010). *Avoiding new poverty: Mining-induced displacement and resettlement. International Institute for Environment and Development.* https://www.iied.org/16017iied

Fullilove, M. T. (2016). *Root shock: How tearing up city neighborhoods hurts America, and what we can do about it.* New Village Press.

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal,* 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo.* Akal.

Muggah, R. (2014). *Relocation failures in international development: A review of displaced populations*. Routledge.

Pope, C., Mays, N., & Popay, J. (2007). *Synthesizing qualitative and quantitative health evidence: A guide to methods.* Open University Press.

Sánchez, A. (2020). *Metodología de la investigación científica en ciencias sociales: Guía para revisiones narrativas.* Editorial Académica Universitaria.

Scudder, T. (2005). *The future of large dams: Dealing with social, environmental, institutional and political costs*. Earthscan.

Vanclay, F. (2017). The potential application of the social impact assessment framework for addressing resettlement challenges. *Impact Assessment and Project Appraisal,* 35(1), 1-12. https://doi.org/10.1080/14615517.2016.1271539

World Bank. (2023). *Resettlement and livelihoods: A guide to best practices in extractive industries.* World Bank Group. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1950-6